

El libro y la lectura, un asunto público

La participación de los editores en la Política Nacional de la Lectura y del Libro en Chile



Este texto apasionante de Paulo Slachevsky - [Lom Ediciones \(Chile\)](#), miembro de la asociación [Editores de Chile](#) y de la Alianza - es la transcripción de la intervención que hizo durante el [encuentro sobre las políticas públicas para el libro en el mundo árabe: miradas cruzadas con Chile y Francia, 30 de marzo de 2017, Túnez](#).

Agradezco la invitación a participar de este encuentro a la feria del libro Túnez y a la Alianza de Editores Independientes, sin duda tenemos más de un punto en común en los desafíos del libro de América Latina y el mundo árabe.

Una y otra vez durante la postdictadura en Chile, los temas del libro y la lectura han quedado al margen de los ejes de las políticas públicas más significativas. Al igual que la problemática de los medios de comunicación, a estos temas se les ha dado el rango de “asunto de un sector específico”, temas de “especialistas” o de profesionales del área.

Entre otros, la cuestión también ha estado ausente de los grandes debates sobre el futuro de la educación en el país. Pero, ¿acaso es posible pensar una educación de calidad sin enfrentar el déficit de comprensión lectora? ¿Es sincero hablar de una verdadera democracia con un pueblo que no fortalezca su capacidad reflexiva y crítica? ¿Es posible socializar estas capacidades sin lectura, sin el libro? ¿Es factible enfrentar la desigualdad sin buscar equiparar el acceso a los bienes culturales? ¿Es viable pensar en el desarrollo, en un país sustentable, limitándonos a ser exportadores de materias primas?

Frente a estas preguntas, me asiste la convicción de que el libro y la lectura son asuntos de interés público, claramente transversales a muchos de los desafíos que tienen nuestros países. Para mejorar la educación, democratizar la sociedad y generar mayores condiciones de igualdad, se hace necesario cambiar la relación de la ciudadanía con el libro. Sin duda esta no es una condición suficiente, pero sí una condición necesaria para contribuir a la construcción de un país desarrollado y sustentable. Por ello es tan importante que el Consejo Nacional del Libro y la Lectura en Chile haya centrado su quehacer, durante este gobierno de Michelle Bachelet, en elaborar e implementar la nueva Política Nacional de la Lectura y del Libro. Esta Política, construida a través de un proceso participativo del que recoge parte importante de las propuestas, es una estrategia sistémica que aborda toda la cadena del libro, potenciando su democratización en la sociedad chilena. Fortalece también las condiciones para que como país tengamos un rol proactivo en la elaboración y producción de conocimiento, buscando resquebrajar el colonialismo cultural que nos domina y la brutal desigualdad en el intercambio Norte-Sur.

Chile es un país periférico en la industria editorial de lengua castellana. Johan Heilbron, en su artículo “El sistema mundial de traducciones” muestra cómo en países donde se habla inglés, lengua dominante en la actualidad, se publican muy pocas traducciones de otros idiomas (menos del 5% de la producción total de libros). A la inversa, en países de lenguas semi-periféricas del sistema, como el francés o el castellano, las traducciones representan cerca de un 15% de las publicaciones, dibujándose un sistema mundial jerarquizado y con una estructura centro-periferia.

Ahora bien, según el registro del ISBN de Chile, solo son traducciones 255 de los 6.045 títulos nuevos del año 2012. De estas, 131 son al castellano y tres al mapudungun. Es decir, apenas el 4,2% del total de publicaciones son traducciones y solo un 2,2% se hicieron a lenguas locales. Vivimos así una condición doblemente periférica dentro del sistema internacional de traducciones: de la lengua castellana en relación al inglés, y de nuestra función en las industrias editoriales del idioma.

Bajo el alero de un renovado colonialismo cultural, es España el país que traduce por excelencia, asignándoles a los otros países el papel de consumidores de la producción de la península.

Así, los países del cono sur celebramos el bicentenario de la independencia hace algunos años sin haber logrado liberarnos realmente del dominio colonial, más aún si consideramos también el lugar que Estados Unidos ocupa desde el siglo pasado. Claramente el capital simbólico editorial (y también el capital económico) se concentra en España y en países del Norte, y para comprobarlo basta examinar las vitrinas de librerías y las páginas dedicadas a los libros en la prensa. De hecho, los flujos de circulación de libros entre los países de la lengua tienen todavía muchos rezagos de lo que fue el antiguo comercio colonial; es evidente el limitado tráfico de libros entre nuestros territorios, como el dominio del tráfico desde España, en una sola dirección. Las características de estos flujos nos dejan en un estatus de país consumidor más que de país productor en la industria del libro en lengua castellana. De hecho, en una expresión resumida de ese dominio colonial, nos educamos con textos que, predominantemente, son producidos por editoriales de países del norte.

El libro, entre el mercado y lo público

Las demandas del movimiento estudiantil del 2011 pusieron nuevamente al centro de los debates del país el tema de lo público. Décadas de dominio neoliberal llevaron a su extremo la sacralización del mercado, que permeó todos los ámbitos de la sociedad chilena, privatizando completamente nuestras vidas. Se naturalizaron las prácticas de un modelo económico que sacó de escena lo público, lo que todos construíamos colaborativamente para el beneficio colectivo, para el bien común.

La crisis que vive la sociedad chilena hoy tiene sus bases en esa historia de despojo y de entrega. Como señaló Orlando Letelier, ministro de relaciones exteriores de Salvador Allende, semanas antes de ser asesinado por la dictadura chilena en un atentado en Washington, el modelo económico y la tortura y represión política son las dos caras de una misma moneda. Hacia finales de la dictadura quedó de lado la práctica sistemática de la tortura política; sin embargo, se reforzó y consolidó la otra cara de la moneda: el modelo económico.

De esta manera, el libro fue también absorbido por la lógica neoliberal, relegando su sello cultural, dominando su carácter comercial, como si se tratase de una mercancía más. La relevancia de las obras pasó a medirse con el cuánto vende. La misma censura, de ser política y religiosa, se reconfiguró en censura de mercado y, como es el caso con otras prácticas en ese ámbito, pasó a reinar de manera casi inadvertida, o naturalizada. La resistencia a ese dominio comercial dio lugar al movimiento de editores independientes; son los que principalmente han buscado rescatar el carácter cultural y público del libro, liberando este milenario objeto de las camisas de fuerza de los mercados.

De hecho, la historia de la edición ha estado marcada por numerosas batallas en favor de algunos de los principios fundamentales que sustentan los proyectos de sociedad más democráticas, de ciudadanos activos y participativos, donde el sentido de lo común y lo público cobra fuerza. La defensa de la libertad de expresión, de pensamiento y de creación se refleja una y otra vez en las luchas de creadores, periodistas y editores contra Estados dictatoriales y/o totalitarios. Hoy ese totalitarismo en América Latina se plasma en el mercado. La misma concentración en la industria editorial y de las comunicaciones a nivel mundial ha llegado a niveles nunca antes vistos. En recuperar el carácter cultural, social y público del libro se expresa el sentido mismo de esa resistencia.

Por lo demás, lo público está en la base misma del quehacer editorial. Todos sabemos que la función del editor/a es publicar. Y “publicar”, según la definición que hace el diccionario, es “hacer público”, “patente” algo. La misma creación intelectual, que es protegida por los derechos de autor, no es una propiedad cualquiera, tiene en sus orígenes características propias de los bienes públicos, no se agota cuando una la “consume. Por lo demás, la creación se nutre de la creación de otros, florece de las semillas que dejan otros.

En tal sentido, al igual que es básico resguardar el equilibrio entre los derechos del autor y de la sociedad toda en acceder al conocimiento, a la libertad de expresión y a la comunicación, al derecho de seguir creando libremente, es fundamental resguardar el carácter cultural, educacional, social y público de los libros, libre de las lógicas propias de los mercados.

Una política que nace desde la ciudadanía

El año 2000, cuando se funda la *Asociación de Editores Independientes*, hoy *Editores de Chile*, asociación de editores independientes, universitarios y autónomos, se hace explícita una voz desde la ciudadanía que busca recuperar en la sociedad chilena el carácter cultural, social y político del libro.

Desde sus inicios, el quehacer de la Asociación se centró en trabajar para democratizar el libro, recuperar la valorización simbólica de este objeto en la sociedad chilena y potenciar la creación y producción local. Desde la práctica misma, poco a poco se fue consolidando la conciencia de que para romper el círculo vicioso que vivía el libro en Chile desde el golpe militar, era fundamental el diseño e implementación de una estrategia sistémica que enfrentara los desafíos pendientes, pensando en toda la cadena del libro y la lectura. La publicación el año 2005 de *Una política de Estado para el libro y la lectura. Estrategia integral para el fomento de la lectura y el desarrollo de la industria editorial en Chile* marcó un claro punto de inflexión en los intentos desde la sociedad civil para que el Consejo del Libro y la Lectura no siguiera centrando todo su quehacer en los fondos concursables.

Ese mismo año 2005, el ministro de Cultura acogió la propuesta elaborada por Editores de Chile y se trabajó una nueva versión. Así, la “Política Nacional del Libro y la Lectura” se presentó bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet. Lamentablemente, dicha política oficial no fue nunca implementada en los hechos.

Durante la campaña electoral del año 2013, articulados por Editores de Chile, las tres asociaciones que reunían a editores les hicieron llegar una carta a los candidatos a la presidencia insistiendo en la importancia de incluir en sus programas de gobierno “la actualización e implementación de la Política Nacional del Libro y la Lectura”, junto a otras cuatro propuestas en torno al libro y la cultura. En esta misiva se insistía en el rol transversal del libro y la lectura en muchos de los desafíos que teníamos como sociedad. Fueron varias las reuniones que los representantes de las asociaciones sostuvieron con los candidatos y/o sus encargados de cultura. Con la participación de escritores, bibliotecarios, libreros, editores independientes y universitarios, y ciudadanos vinculados al mundo del libro, se logró que la Política de Libro y la Lectura quedara plasmada en el Programa de Gobierno de Michelle Bachelet.

El año 2014, la nueva secretaria ejecutiva del Consejo del Libro y la Lectura asumió con fuerza el desafío del programa. Convocó abiertamente a una construcción participativa de la nueva política. En base a la política del 2006, agrupados en mesas temáticas –fomento de la lectura, Educación y Lectura, Creación, Industria e Internacionalización, Patrimonio, Marco Jurídico e Institucionalidad, Libro digital– se elaboraron propuestas que sirvieron de base de la nueva política. En base a estas, una comisión redactó la propuesta final de la Política. Si bien parte importante de las propuestas de la sociedad civil quedaron integradas en la política, en la etapa de negociación con otros ministerios en torno a las medidas que articulaban el que hacer de más de una institución pública, algunas propuestas emblemáticas –como el precio único y la reducción del IVA al libro, 19% en Chile– fueron lamentablemente excluidas, y otras rebajadas en su alcance. No es fácil abrir el funcionamiento del Estado a una participación efectiva que vaya más allá de lo propositivo. En abril del 2015, se presentó la nueva política, abriendo paso entonces a su implementación.

Una política que busca abrir un círculo virtuoso para el libro y la lectura en Chile

La Política Nacional de la Lectura y el Libro (PNLL) es una propuesta sistémica que aborda toda la cadena del libro y la lectura, buscando a través de diversas medidas democratizar el libro en nuestro país, potenciando a su vez la creación y producción local. Al igual que las versiones anteriores, es transversal a esta propuesta la idea de potenciar una ciudadanía más consciente de su papel en la sociedad, una ciudadanía más participativa, más deliberante y creativa: “Concebir la lectura como parte fundamental de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, considerándola factor esencial en la formación de ciudadanas y ciudadanos creativos, reflexivos, críticos y participativos y constructores de procesos democráticos”.

Dividida en seis ámbitos de acción que consideran propósitos orientadores, objetivos, medidas específicas e instituciones responsables, la política busca enfrentar directa o indirectamente varias de las limitaciones que ha tenido la acción pública en torno al libro y la lectura durante la postdictadura. Pese a todos los recursos invertidos y esfuerzos realizados en este ámbito, los bajos niveles de comprensión lectora por parte de la ciudadanía se mantienen. No deja de impactar cómo las mediciones de competencias básicas realizadas por el Centro Microdatos de la Universidad de Chile no muestran mayor variación entre los años 1998 y 2013. En el mismo período, son muy grandes las sumas que se han invertido en libros de texto repartidos a escolares en todo el país. En tal sentido no podemos afirmar que la ausencia de recursos invertidos en libros es una de las razones por las cuales no hay mejoras sustantivas en la comprensión lectora, sino, entre otros, en el cómo esos recursos se han invertido, los que dan cuenta de una gran concentración y entrega a los grandes grupos que por sobre todo hacen un negocio del libro escolar.

La medida aprobada durante el proceso participativo de elaboración de la Política en la mesa de industria e internacionalización: “Repensar y reformular el sistema de adquisición y uso de textos escolares potenciando la diversidad editorial, limitando la concentración, rebajando las barreras de acceso, potenciando su aporte efectivo al proceso educativo como a la comprensión lectora” quedó profundamente deslavada en la versión final del documento, pero aún puede servir para poner en discusión este tipo programas. Destinar menos recursos a la compra de textos escolares y más a libros de literatura y otras disciplinas que se repartan entre los mismos estudiantes ¿no sería acaso un mecanismo mucho más potente para potenciar la capacidad lectora, la curiosidad y el aprendizaje de los alumnos? Plantear interrogantes, establecer un espacio de discusión abierto sobre los modelos de acción que año a año se repiten, es una necesidad imperiosa, propia de todo quehacer que busca mejorar.

Activar la producción intelectual local y frenar nuestro carácter dependiente en el intercambio de libros con España y países del Norte, también está presente en la Política, y está al centro del capítulo en torno a Industria e Internacionalización. El propósito orientador propone: “Crear las condiciones para el desarrollo de una industria del libro nacional y regional sostenible, ...que permita incrementar y fortalecer la producción creativa e intelectual, así como la producción y circulación editorial que asegure un intercambio equilibrado del libro chileno dentro del país, con América Latina y el mundo, poniendo en valor la bibliodiversidad, el desarrollo del pensamiento local, indígena y de las diversas manifestaciones de nuestras expresiones culturales ...” De hecho, a excepción de algunos programas, este propósito ha sido uno de los grandes ausentes de las políticas públicas relacionadas con el libro, lo que se refleja con claridad en las adquisiciones de libros realizadas por las instituciones públicas, las que se concentran en libros importados o empresas extranjeras.

Hay una clara falta de conciencia en muchas instituciones públicas vinculadas a la educación, a la cultura y al libro, del efecto multiplicador que podrían tener las políticas de estas instituciones, al ser ellas motor de un ecosistema propio en la creación y producción intelectual local. A la hora de tomar decisiones, prima el subjetivo argumento de la presunta “calidad”, que sin duda tiene su matriz en las cabezas colonizadas que parten negando y, en el mejor de los casos, dudando respecto a las capacidades intelectuales y materiales de la producción propia, y terminan marginalizando a la producción local. También domina el argumento de “lo que pide la gente”, olvidando, quienes deciden las compras públicas, que difícilmente se puede pedir

o seleccionar aquello que no se conoce, lo que no se muestra. Esto ha significado retroalimentar por años un lamentable círculo vicioso. Por ello en la Política Nacional de la Lectura y el Libro la medida que busca “Instalar una instancia de participación, para que las instituciones públicas y organizaciones de autores y editores promuevan la creación de contenidos diversos en la industria local y aseguren criterios de pertinencia, calidad y diversidad en la oferta y en las compras de libros, que permita aumentar progresivamente, hasta un 60% del monto de las compras públicas de cada programa de ediciones nacionales” ayudará sin duda a revertir esta realidad, como también a terminar con criterios de selección secretos y arbitrarios.

Los desafíos de una implementación participativa

Una implementación efectiva y participativa de la Política Nacional de la Lectura y del Libro conlleva enfrentar varios desafíos; entre ellos superar prácticas que confunden la participación con *focus group*, con la respuesta a encuestas, o la confección de listas de deseos o prioridades. Ello no constituye participación. Tampoco, la participación cultural puede limitarse al derecho de “acceso a la cultura”. El derecho a la cultura es mucho más amplio que el derecho de acceder a la cultura, no se reduce a una lógica de consumidores culturales. Cuando en Chile se debate en torno a una nueva constitución, es fundamental lograr que los procesos participativos sean efectivos, que se hagan cargo de los verdaderos sentidos de la participación ciudadana en la vida cultural de la comunidad de la cual somos parte.

Como se trata de una política pública que recupera el sentido social y cultural del libro por sobre su carácter comercial, potenciando una acción conjunta del espacio público y la sociedad civil, más allá de las lógicas del mercado, no sorprende mucho que ella provoque rechazo a quienes quisieran que sólo aumenten los “consumidores de libros”, entendiendo esta actividad como una mera entretención, sin preocuparse en paralelo del qué se lee y cómo se lee, desde dónde se piensa y se publica. Explícita y/o implícitamente, hay actores del mundo del libro que propician que la mejor política del sector sea la ausencia de toda política, dejar esto al dominio del mercado, un mercado en el que, por lo demás, hasta ahora el Estado ha jugado un rol fundamental, como un gran comprador, favoreciendo en los hechos la concentración.

No es anodino, en tal sentido, tener muy presentes las tensiones entre comercio y cultura que cruzan el mundo del libro a la hora de analizar el escenario donde se implementa una política pública. La misma existencia del movimiento de editores independientes en muchos puntos del planeta se vincula a esas tensiones.

A nivel de la cultura en general, fue la defensa de la diversidad cultural la que aunó las voluntades de Estados y sociedad civil en defensa de las expresiones culturales locales, las que no pueden ser dependientes del mercado. La concentración a nivel mundial en el cine, la música, el libro, demostró que sin una acción de equilibrio por parte de los Estados, la creación y producción cultural local en muchos países del mundo corría serios riesgos de desaparecer. La elaboración y aprobación, en el año 2005, por casi todos los países miembros de Unesco, de la *Convención Internacional para la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales* marcó un importante hito. Mientras las fuerzas del mercado buscan imponer en los tratados de libre comercio que los bienes y servicios culturales, así como los derechos de autor, sean tratados como una simple mercancía, inhibiendo toda acción de los Estados en la materia, la sociedad civil y las autoridades culturales de muchos países buscan que la producción cultural sea tratada de manera particular, considerando que es portadora de “identidades, valores y significados”, como señala la Convención. Nuestro país tempranamente ratificó la Convención de Unesco, y la sociedad civil, a través de *La Coalición Chilena para la Diversidad Cultural*, participó activamente del movimiento internacional en favor de esta, y por reservas para la cultura en los tratados de libre comercio, interpelando al Estado a resguardar la capacidad reguladora en cultura. De esa misma lucha, editores de la Asociación, acuñaron el concepto bibliodiversidad: la defensa de la diversidad cultural en el mundo del libro.

Entre otras tensiones que debe enfrentar la implementación de la política del libro, no está ausente la complejidad de exigir una acción conjunta en su implementación por parte de varias instituciones públicas y de la sociedad civil. Ello obliga a modificar los modos de operar de quienes están acostumbrados a actuar como dueños y señores desde sus dependencias, como islas, sin consideración alguna por otros que realizan labores similares. La ausencia de confianza y de sentidos de comunidad entre los diversos actores de un mismo sector es fuerte, predomina muchas veces el sentimiento de que los otros están en la vereda de enfrente. Tanto a nivel de las instituciones públicas como en la sociedad civil, es necesario reforzar los sentidos de comunidad entre los actores locales que se inclinan por el polo cultural: autores, editores, profesionales del libro, libreros, bibliotecarios, traductores, funcionarios que trabajan en la administración pública en torno al libro, son parte de un mismo ecosistema. Como señala Bourdieu, en su artículo *La revolución conservadora en el campo editorial*, la declaración explícita de las cosas puede contribuir a articular la solidaridad entre los actores y reforzar la resistencia ante las fuerzas del mercado. Difícilmente se multiplicarán las capacidades lectoras de la ciudadanía, las posibilidades para escribir y publicar de los escritores y académicos, si no se potencian al mismo tiempo las capacidades editoriales del país, las posibilidades de acceso al libro local que, entre otros, es por lejos más económico que el libro importado. El devenir de la industria nacional del libro está estrechamente vinculado al devenir de los autores, bibliotecarios, libreros, posibles lectores; no son mundos apartes, veredas opuestas, intereses esencialmente contradictorios. Sólo un trabajo mancomunado tendrá efectos significativos que posibiliten el desarrollo y sustentabilidad de este ecosistema. En tal sentido, poco ha contribuido a ello un accionar público centrado en fondos concursables donde cada uno compite con el otro. Es así entonces que la Política Nacional de la Lectura y del Libro significa no sólo pasar a otro nivel en el tipo de políticas a desarrollar, sino que también habrá de contribuir a congregarse en vez de dispersarse, a crear y ampliar una comunidad ligada al conocimiento cuyo eje es el libro.

La lectura tecnocrática de las políticas, que las desprende de su cuerpo articulador, de sus principios orientadores, dejando medidas sueltas y aisladas, es otro de los desafíos que debe abordar la implementación de esta política. Una medida sacada de su contexto, muchas veces no significa nada, pierde todo sentido. Los criterios de evaluación en la implementación de la política deben cuidar particularmente este aspecto, pues si no se atiende esta problemática, muchas veces se generan efectos perversos que terminan bloqueando los efectos multiplicadores de cada medida. Estamos ante un tema complejo, con múltiples variables y, en tal sentido, no puede resumirse en evaluaciones simples, unilaterales. Las evaluaciones descontextualizadas inducen a reproducir una y otra vez una misma realidad, cortando alas a la inventiva y a la diversidad. Un ejemplo de ello es evaluar los libros y las adquisiciones de una biblioteca por la cantidad de préstamos que logran. Puede ser, sin duda, un criterio a considerar dentro de una pauta más general, pero centrar la atención sólo en criterios cuantitativos de ese tipo termina reproduciendo las lógicas del *rating* de la televisión, que de calidad nada han aportado y sí han anulado la diversidad, los niveles más profundos y complejos de la producción cultural, consagrando además el dominio del mercado en los medios de comunicación.

En este contexto, sumados los avatares propios del cotidiano y las dificultades propias de la participación ciudadana (cuesta involucrarse y sumar en el trabajo colectivo, reconstruir confianzas y lograr constancia en la participación), la implementación de la Política no es tarea fácil. Varios niveles reúnen a los diversos actores de la política: comité interministerial, mesas técnicas públicas, mesas mixtas y comisiones de trabajo del sector público y de los representantes de la sociedad civil. Las mesas son abiertas, reúnen a todos los actores interesados en participar de un ámbito. En ellas se eligieron como coordinadores a representantes de la sociedad civil. De estas mesas se conformaron comisiones –más de una para algunos ámbitos–, las que en algunos casos para ser más operativas quedaron con uno o dos representantes por asociación partícipe.

Una oportunidad histórica

El golpe de Estado de 1973, que marcó a sangre y fuego al país, sin duda selló un antes y un después para el libro en Chile. Como da cuenta Bernardo Subercaseaux en la *Historia del Libro en Chile*, durante toda la República se concibió al libro como un instrumento fundamental para educar, formar ciudadanía. Una alta valorización simbólica del libro estaba presente en los discursos de país. La máxima expresión de ello fue el proyecto editorial Quimantú durante la Unidad Popular, que con sus ediciones masivas y libros al valor de una cajetilla de cigarrillos buscaba romper las barreras de acceso de los sectores populares al libro. El libro era parte del proceso democratizador de la sociedad. Con el golpe y los autos de fe, el libro pasó de compañero de ruta a convertirse en elemento de sospecha y peligro. Aquí se marcó un antes y un después en la historia de la edición chilena; un antes y un después en la valorización simbólica del libro en la sociedad chilena. La misma aplicación del IVA al libro el año 1976, en momentos en que el horror represivo reinaba, expresa la voluntad explícita de la dictadura de limitar el acceso popular al libro, a la cultura. Mientras que a la televisión y los deportes se les eximía de IVA, al libro se le gravaba el impuesto.

Los gobiernos de la Concertación, terminada la dictadura, no trajeron consigo un destape cultural, como fue el caso en muchos países que salían de regímenes dictatoriales. La ley del libro de 1993 fue sin duda un paso importante, pero para nada revirtió lo que había instalado la dictadura en el país. No se tocó el IVA, tampoco algunas censuras, menos el dominio del mercado en el sector. No podemos desconocer, sin embargo, que mirado en el tiempo, es mucho lo que se ha realizado y avanzado: se han multiplicado las bibliotecas, las publicaciones, los fondos concursables, las editoriales, etc., pero falta articular y aunar las energías presentes, encauzarlas hacia un fin común para potenciar su desarrollo, y por ello es tan importante la implementación de la Política. En tal sentido, estamos ante una oportunidad histórica que no se puede desperdiciar.

Participar activamente en la producción de la historia del mundo

«Habiendo demostrado que todos son filósofos, aunque sea a su manera, inconscientemente, porque incluso en la mínima manifestación de cualquier actividad intelectual, el “lenguaje”, se halla contenida una determinada concepción de mundo, se pasa al segundo momento, al momento de la crítica y la conciencia, o sea a la cuestión: ¿es preferible “pensar” sin tener conciencia crítica, en forma disgregada y ocasional, o sea “participar” en una concepción de mundo “impuesta” mecánicamente por el ambiente externo, y por lo tanto por uno de los tantos grupos sociales en los cuales cada cual se encuentra automáticamente incluido desde su entrada en el mundo consciente... o es preferible elaborar la propia concepción del mundo consciente y críticamente, y por lo tanto, en conexión con tal esfuerzo del propio cerebro, elegir la propia esfera de actividad, participar activamente en la producción de la historia del mundo, ser guías de sí mismos, y no ya aceptar pasivamente y supinamente desde el exterior el sello de la propia personalidad?»

La lúcida reflexión de Antonio Gramsci en sus apuntes para “una introducción y una iniciación en el estudio de la filosofía y de la historia de la cultura” de sus *Cuadernos de la cárcel* hace explícita la importancia de la conciencia crítica, base de una real participación en la sociedad. Releva la importancia de constituirse en sujeto de su propia historia. En ese proceso personal y social que es el “momento de la crítica y la conciencia”, el libro y la lectura juegan un rol central. Podríamos decir que leer es parte del camino hacia una “propia concepción del mundo consciente y críticamente”, en la posibilidad de “ser guía de sí mismo”. En tal sentido, cuando se está finalmente implementando de manera participativa *La Política Nacional de la Lectura y del Libro*, en el fondo está en juego la participación ciudadana en dos niveles muy distintos: a primera vista, la manera cómo se instaura la Política misma y el rol de la ciudadanía en este proceso; pero, en el fondo y lo más importante, está en juego un tema mucho más relevante cuyo alcance sobrepasa con creces la Política del Libro misma: cuál es la posibilidad de potenciar una participación consciente de la sociedad toda, que mujeres y hombres de nuestras sociedades puedan “elegir la propia esfera de actividad, participar activamente en la producción de la historia del mundo, ser guías de sí mismos”

Bibliografía

Bachelet, Michelle (2013), *Chile de todos, programa de gobierno 2014-2018, Michelle Presidenta*. En: <<http://michellebachelet.cl/programa/>>

Bourdieu, Pierre (1999), « Une révolution conservatrice dans l'édition », en *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. 126, n.º1, pp. 3-28, Francia.

Centro Microdatos Universidad de Chile y OTIC Cámara Chilena de la Construcción (2013), *Segundo Estudio de Competencias Básicas de la Población Adulta 2013 y Comparación Chile 1998-2013*. Santiago de Chile; Cámara Chilena de la Construcción.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2005), *Política Nacional de la Lectura y el Libro*. Santiago de Chile; Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2006), *Política Nacional de la Lectura y el Libro*. Santiago de Chile; Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2014), Proceso participativo de elaboración de la PNLL, Mesa de industria e internacionalización. Santiago de Chile; Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2015), *Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020*. Santiago de Chile; Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Editores de Chile, Cámara del Libro, Furia del Libro (2013), *Carta a los candidatos a la Presidencia de la República*. Santiago de Chile; Editores de Chile, Cámara del Libro, Furia del Libro.

Editores independientes de Chile (2000), *Manifiesto*. Santiago de Chile; Editores independientes de Chile.

Enríquez-Fuentes, Helena (2008), *El comercio de libro entre España y América Latina. Disonancia en la reciprocidad*. París; Alianza Internacional de Editores Independientes.

Escalante Gonzalbo, Fernando (2007), *A la sombra de los libros. Lectura, mercado y vida Pública*. México; El Colegio de México.

Fundación Chile 21 y Asociación de Editores de Chile (2005), *Una política de Estado para el libro y la lectura. Estrategia integral para el fomento de la lectura y el desarrollo de la industria editorial en Chile*. Fundación Chile 21 y Asociación de Editores de Chile, Santiago de Chile.

Heilbron, Johan (2009), "Le système mondial des traductions, en Sapiro, Gisèle, *Les contradictions de la globalisation éditoriale*, París, Nouveau Monde.

Gramsci, Antonio (2001), *Cuadernos de la cárcel, Tomo 4*. México; Ediciones Era.

Mesa de Industria e Internacionalización del libro (2014), propuestas Política del Libro y la Lectura. Santiago de Chile; Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Ministerio de Educación (1993), «Ley 19.227, que crea Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura», en *Diario oficial*, Sábado 10 de Julio.

Noel, Sophie (2012) *L'édition indépendante critique : engagements politiques et intellectuels*. Francia; Presses de l'Enssib, Villeurbanne.

Soto, Hernán y Lawner, Miguel (2011), *Orlando Letelier: el que lo advirtió. Los Chicago Boys en Chile*. Santiago de Chile; LOM ediciones.

Subercaseaux, Bernardo (2010), *La historia del libro en Chile*. Santiago de Chile; LOM ediciones.

Unesco (2005), *Convención Internacional para la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales*. Unesco, París, Francia.